

C.A. de Santiago

Santiago, seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados José Joaquín Ugarte Vial y Gonzalo Cruz Eberhard, en representación de **Albemarle Limitada**, quienes interponen recurso de queja en contra del señor juez árbitro mixto don **Jorge Baraona González**, por las faltas y abusos graves que habría cometido al dictar la sentencia definitiva de única instancia, de fecha 22 de agosto de 2023, Rol CAM N°3588-2019, por medio de la cual acogió parcialmente la demanda deducida por su parte, concediéndole el pago de algunas partidas de perjuicios y multas, rechazando otras pretensiones indemnizatorias.

Mencionan como antecedentes de su causa que, en el año 2018 se suscribió un contrato de compra y suministro de materiales entre Albemarle Limitada (en adelante “Albemarle”) y Emaresa, Ingenieros y Representaciones S.A. (en adelante “Emaresa”). Indican que en virtud de dicha convención Emaresa se obligó a entregar grandes cantidades de geomembranas y geotextiles a Albemarle, los que debían cumplir con ciertas especificaciones técnicas. Exponen que, al recibir los productos, se detectaron defectos en las geomembranas entregadas por lo que la proveedora le entregó un certificado de calidad, que resultó ser falsificado, tal como fue determinado en la sentencia arbitral.

Es en este contexto, se dedujeron demandas recíprocas, precisando que su parte demandó el pago de: (i) el costo de las pruebas y análisis técnicos; (ii) los sobre costos en que tuvo que incurrir para reemplazar las geomembranas defectuosas; (iii) las multas convenidas en el contrato como sanción civil por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TCLXPWHERU

incumplimiento de Emaresa; y (iv) los costos en que tuvo que incurrir para desinstalar las geomembranas defectuosas.

Precisan que, pese a que la sentencia rechazó varias de sus pretensiones, en el presente recurso sólo se impugnará aquellas en las cuales el juez actuó con falta o abuso grave, según detalla a continuación.

En primer lugar, cuestionan el rechazo de los sobrecostos incurridos por Albemarle en la compra de geomembranas de reemplazo, desconociendo la relación de causalidad entre el incumplimiento de Emaresa y dicha compra, a pesar de estar acreditada en el proceso. Cuestiona además que el juez árbitro haya exigido una licitación para la compra de reemplazo, considerando las circunstancias apremiantes en que se encontraba Albemarle.

En segundo lugar, controvierten el rechazo de la mitad de los costos incurridos por Albemarle para determinar la calidad de las geomembranas entregadas por Emaresa, a pesar de que el propio juez árbitro calificó previamente dichas pruebas y análisis técnicos como “indispensables” en su conjunto. En ese sentido, se configuraría una contradicción al considerar tales pruebas como “sobreabundantes”, sin entregar una justificación para ello.

En tercer lugar, califican como falta y abuso grave el rechazo de la mitad de los costos en que incurrió Albemarle para desinstalar las geomembranas defectuosas, puesto que la misma prueba que permitió al juez establecer la existencia, monto y concepto de dichos costos, demuestra que el 100% del monto reclamado corresponde a tal desinstalación, sin que el sentenciador justifique por qué descontó el 50%.

En definitiva, pide que se acoja el presente recurso de queja y se enmienden las faltas y abusos graves denunciados,



modificando la sentencia y, condenar a Emaresa al pago de los sobrecostos en la compra de geomembranas de reemplazo, la totalidad de los costos incurridos en las pruebas y análisis técnicos, y la totalidad de los costos de desinstalación de las geomembranas defectuosas, todo ello con reajustes e intereses, y demás medidas que esta Corte estime necesarias.

Segundo: Que comparece el juez árbitro Jorge Baraona González, quien evacúa el informe requerido, indicando que no incurrido en las faltas o abusos graves que se le imputan en el recurso. Argumenta que la sentencia impugnada se encuentra suficientemente fundada y que las razones por las cuales acogió o rechazó las pretensiones de las partes están debidamente desarrolladas.

Expone que la quejosa ha vulnerado el espíritu arbitral al interponer el presente recurso, considerando que las partes, por acuerdo, sustrajeron la controversia del ámbito de la justicia ordinaria para entregarla al conocimiento de un árbitro designado, renunciando a todos los recursos que la ley les confería, con excepción de aquellos irrenunciables como el recurso de queja. Agrega que el referido espíritu arbitral exige a las partes respetar de buen grado la sentencia definitiva que resuelve el conflicto, sin utilizar injustamente un recurso de queja, cuya exclusiva finalidad, conforme al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, es corregir las faltas o abusos graves cometidos por el juez recurrido al dictar la resolución impugnada.

En cuanto a las faltas o abusos graves denunciados por Albemarle, el juez árbitro procede a explicar por qué, a su juicio, no se configuran en la especie.

Respecto al rechazo de los sobrecostos o backcharges incurridos por Albemarle en la compra de productos de



reemplazo, el sentenciador señala que en el fallo se explican razonadamente los motivos por los cuales se rechazó dicha pretensión, estimando que se trata de un cobro contrario al contrato y al Código Civil, remitiéndose a los considerandos vigésimo a vigésimo segundo de la sentencia.

En relación con el rechazo parcial de los costos incurridos para determinar la calidad de las geomembranas de Emaresa, sostiene que no era posible acoger dicha pretensión a título de cobro revertido, pero sí la concedió parcialmente a título indemnizatorio, por las razones entregadas en los motivos vigésimo primero, vigésimo séptimo y vigésimo octavo del fallo.

Finalmente, sobre el rechazo parcial de los costos incurridos por Albemarle para desinstalar las geomembranas defectuosas, el informante indica que rechazó tal petición como cobro revertido, pero la acogió como indemnización, aunque reducida a la mitad, remitiéndose al considerando vigésimo noveno de la sentencia.

Tercero: Que comparece Ramón Jara Contreras, en representación de **Emaresa Ingenieros y Representaciones S.A.**, quien también deduce recurso de queja en contra del juez árbitro **Jorge Baraona González**, por la dictación de la sentencia de 22 de agosto de 2023, en la que se cometieron faltas y abusos graves, y acogió parcialmente su demanda sólo respecto del pago de geotextiles, rechazándola en todo lo referente a las geomembranas, y que acogió casi íntegramente la demanda reconvencional de Albemarle.

Menciona como antecedentes de su recurso, al igual que su contraparte, que con fecha 10 de abril de 2018, las partes suscribieron un contrato de suministro de geomembranas y geotextiles. Expone que Albemarle rechazó la totalidad del material entregado, sin pagar su precio, razón por el cual



demandó el cumplimiento forzado del contrato y el pago del precio, mientras que Albemarle, en tanto, lo demandó reconvencionalmente.

En cuanto a las faltas y abusos graves incurridos por el árbitro, afirma en primer lugar, que existe una infracción al debido proceso, en particular al principio de bilateralidad de la audiencia e igualdad ante la ley, en tanto el señor árbitro sucesiva y sistemáticamente, entorpeció su actividad probatoria, impidiéndole ofrecer la mejor prueba posible para acreditar su pretensión.

En detalle, el juez árbitro, no dio lugar a la medida prejudicial solicitada por su parte para garantizar la conservación de las geomembranas, lo cual afecta la posterior prueba de Emaresa, ya que una de sus alegaciones que las geomembranas fueron almacenadas en forma negligente.

Agrega, que el recurrido tampoco permitió al perito experto doctor Timothy Stark tener acceso a pruebas del expediente para elaborar su informe pericial en particular, las pruebas de laboratorio.

En el mismo sentido, se configura la infracción al debido proceso el hecho de decretar como medida para mejor resolver un nuevo peritaje de carácter estadístico, a una persona sin las competencias necesarias, como es el señor Daroch.

Afirma también que, existe una falta grave y abuso al no haber permitido al doctor Stark ser oído respecto a las críticas metodológicas e interpretación de los resultados realizada por el señor Daroch, lo que evidencia una vulneración a la igualdad de armas entre las partes del proceso.

En segundo lugar, estima que el juez arbitrio incurre en falta o abuso grave al dictar un fallo infundado que infringe la ley y el mérito de autos.



En efecto, afirma que en la sentencia se ignoraron los Certificados TRI los que acreditan de manera directa la calidad de las geomembranas a la fecha en que fueron entregadas a Albemarle.

Del mismo modo, sostiene que el juez procedió a descartar infundadamente el efecto de degradación de las geomembranas advertido por el perito, considerando sólo parte de su informe y omitiendo su conclusión categórica en cuanto a los resultados.

Y en el mismo acápite, refiere que la falta grave o abuso se configura al tener por acreditado el lucro cesante a pesar de no tener por acreditada su existencia, esbozándola de manera meramente condicional y sin fundamento en prueba alguna.

Pide, en definitiva, acoger el recurso, anular la sentencia impugnada y declarando que se acoge íntegramente su demanda y rechazando íntegramente la reconvencional de Albemarle. En subsidio, pide enmendar el laudo rechazando el lucro cesante por no haberse acreditado su existencia.

Cuarto: Que comparece el juez árbitro Jorge Baraona González, quien evacúa el informe requerido, indicando que no ha incurrido en las faltas o abusos graves que se le imputan en el recurso. Argumenta que la sentencia impugnada se encuentra suficientemente fundada y que las razones por las cuales acogió o rechazó las pretensiones de las partes están debidamente desarrolladas.

Reitera que la quejosa ha vulnerado el espíritu arbitral al interponer el presente recurso, considerando que las partes, por acuerdo, sustrajeron la controversia del ámbito de la justicia ordinaria para entregarla al conocimiento de un árbitro designado, renunciando a todos los recursos que la ley les confería, con excepción de aquellos irrenunciables como el recurso de queja.



Agrega que el referido espíritu arbitral exige a las partes respetar de buen grado la sentencia definitiva que resuelve el conflicto, sin utilizar injustamente un recurso de queja, cuya exclusiva finalidad, conforme al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, es corregir las faltas o abusos graves cometidos por el juez recurrido al dictar la resolución impugnada.

En cuanto a las faltas o abusos graves denunciados por Emaresa, el juez árbitro procede a explicar por qué, a su juicio, no se configuran en la especie.

En cuanto a los supuestos abusos en que habría incurrido durante la tramitación del proceso, estima que no sería procedente informar pues todas ellas se basan en resoluciones que están debidamente fundadas y que se sustentan en sí misma. Agrega que, en cualquier caso, no pueden ser objeto de una queja, habiendo transcurrido en todas ellas el plazo para interponerla y al no existir la hipótesis legal que autoriza para recurrir de queja.

Sobre el segundo grupo de faltas o abusos graves que emanarían del fallo mismo, el informante los agrupa en tres acápites, respecto de los cuales procede a explicar los fundamentos y razones por los cuales estima que no son tales.

En primer lugar, que en el fallo se explica razonadamente por qué se consideró que las geomembranas no cumplían con las especificaciones del contrato y se remite a esos motivos contenidos en los considerandos segundo a séptimo.

En segundo lugar, que el fallo explica conforme con criterios de sana crítica que no se consideró el efecto de la degradación del material indicado por el perito señor Stark, por estimar no segura la conclusión de éste en ese punto, lo cual se expone en el considerando tercero de la sentencia.



En tercer lugar, que el Tribunal entiende que la determinación del daño quedó pendiente porque así fue pedido, pero que potencialmente pudo haberse producido y existe prueba sobre ello, dejándose consignado en el mismo fallo un elemento de hecho para efectos de estimar este posible daño, contenido en el considerando trigésimo primero.

Quinto: Que cabe destacar que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata de “La Jurisdicción Disciplinaria y de la Inspección y Vigilancia de los Servicios Judiciales”, y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de “Las Facultades Disciplinarias”. Que en el ámbito de las facultades disciplinarias de que se encuentran investidos los tribunales superiores de justicia, el recurso de queja, consagrado en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación o, definitivas, pero siempre que ellas no sean susceptibles de recurso jurisdiccional alguno, ordinario o extraordinario. Excepcionalmente, además del recurso de casación en la forma, procede en contra de las sentencias de término dictadas en primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores.

Sexto: Que además no puede dejar de considerarse lo que reiteradamente la doctrina y jurisprudencia han asentado sobre la materia para la procedencia de un recurso como el presente; esto es, que una “falta”, importa y debe entenderse como una transgresión, un defecto, una infracción, que debe estar revestido del elemento de “gravedad”; esto es, de magnitud, de envergadura.



Con el vocablo “abuso” acontece lo mismo, en cuanto ello implica usar mal, injusta, impropia o indebidamente de algo, con la exigencia copulativa de “gravedad”.

En consecuencia, ha de concluirse que no cualquier defecto que pueda imputarse a la sentencia, o más aún, que ésta efectivamente acuse, hace procedente el recurso deducido, sino únicamente cuando los defectos o yerros en que pudiere haber incurrido el sentenciador constituyan infracciones o usos indebidos de gran envergadura o magnitud, que la decisión atacada sea producto de un comportamiento reprochable, ostensible, desde que su destino, de así asentarse, es la sanción disciplinaria, sin perjuicio de lo que aquél signifique para la invalidación de la decisión que se pretende cambiar, en un segundo orden de efectos desde que se haga lugar al recurso.

Séptimo: Que, por consiguiente, aun cuando el remedio legal pueda traducirse en la invalidación de una sentencia que es reflejo de su componente jurisdiccional, nunca debe perderse de vista que el recurso de queja constituye un mecanismo de control del cumplimiento de deberes ministeriales, de manera que únicamente ante la constatación de infracciones de entidad mayor puede provocarse ese efecto de anulación. En suma, este recurso no significa la apertura de una nueva “instancia” que permita al tribunal superior revisar el mérito de la resolución impugnada, como si se tratara de una apelación, menos aún si se tiene en cuenta que -en ejercicio de su autonomía de la voluntad-, las partes convinieron en sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria las materias relacionadas con el contrato celebrado, sometiéndose a la justicia arbitral privada;

Octavo: Que el conflicto sometido a conocimiento del señor Juez Árbitro SJA (mixto) don Jorge Baraona González, designado



por la CAM a solicitud de Emaresa, quien dedujo demanda de cumplimiento forzado de contrato, en contra de Albemarle, solicitando: (a) que se declare que Albemarle incumplió el Contrato, al no pagar la totalidad del precio a que estaba obligada; (b) que se le condene al cumplimiento íntegro de la obligación de pagar el total de lo adeudado en virtud del contrato; (e) que se le condene a indemnizar los perjuicios causados, consistentes en los intereses corrientes devengados desde la mora. Subsidiariamente, demanda la resolución del Contrato con indemnización de perjuicios.

Albemarle, contesta la demanda y deduce demanda reconventional solicitando: (a) que se declare la resolución parcial del contrato; (b) que se condene a Emaresa a pagar los costos incurridos por sus incumplimientos; (c) que se le condene a pagar una serie de multas; (d) más indemnización por el lucro cesante que le ocasionaron los incumplimientos de Emaresa. Se reservó el derecho para discutir la cuantía de ese daño, para la etapa de ejecución del fallo, o en otro juicio diverso; y, (e) que se declare compensada cualquier deuda que existiera entre las partes.

Noveno: Que, el SJA por sentencia de 22 de agosto del año 2023, resolvió:

“SOBRE LA DEMANDA PRINCIPAL

UNO: Se acoge parcialmente la demanda principal, y se condena a Albemarle a pagar a Emaresa la cantidad de USD \$ 1.072.767,15, más el costo proporcional de los servicios adicionales, por USD \$ 6.146,9, más los intereses corrientes para operaciones expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, desde el día 19 de marzo de 2019, por concepto de precio no pagado, en la parte de geotextiles del Contrato de Venta y Suministro celebrado entre las partes, con fecha 10 de abril de



2018, más prestaciones accesorias proporcionales tampoco pagadas.

Que la cantidad anterior de USD aquí establecida se compensará parcialmente con la que debe pagar Emaresa a Albemarle en moneda dólar de los Estados Unidos de América, que es de US \$ 542.770.

En consecuencia, la cantidad que deberá pagar Albemarle a Emaresa es de US \$ 551.337.

Esta última cantidad debe pagarse con intereses corrientes para operaciones en dólares, contados desde el día 16 de julio de 2019, dentro de tercero día de que queda ejecutoriada esta sentencia.

En lo demás, la demanda principal queda rechazada y no se emite pronunciamiento sobre la acción subsidiaria, por estar formulada precisamente en términos subsidiarios y, no existir fundamento para acogerla.

II. SOBRE LA DEMANDA RECONVENCIONAL

DOS: Que se acoge la demanda reconvencional de resolución parcial del contrato y se declara resuelto el contrato celebrado entre las partes de Compra y Suministro de fecha 10 de abril de 2018, en lo que se refiere a la compra y suministro de geomembranas, quedando subsistente el contrato en la parte referida a los geotextiles.

Que, como efecto de la resolución parcial pronunciada, Albemarle no debe pagar el precio del Contrato, en lo que se refiere a las geomembranas.

Que se rechaza la petición por la cual se pide que, como efecto de la resolución parcial pronunciada, se ordene a Albemarle a restituir las geomembranas en el estado en que se encuentran, por lo considerado en el motivo décimo noveno.



TRES: Que se acoge la demanda reconvencional en la parte que pide el pago de una multa por haberse infringido las especificaciones técnicas, en la compra de geomembranas por USO \$ 515.330.

CUATRO: Se acoge la demanda reconvencional por el pago de los costos que tuvo que incurrir la demandante reconvencional para preparar pruebas e informes técnicos por la cantidad de USO\$ 29.440.

CINCO: Se acoge la demanda reconvencional por el pago de los costos que tuvo que incurrir la demandante reconvencional para preparar otras pruebas e informes técnicos por la cantidad de \$ 43.322.368.

SEIS: Se acoge la demanda reconvencional en la parte que se pide el pago por los trabajos de Asercop, pero sólo por la cantidad de \$ 59.000.000.

SIETE: Que se acoge la demanda reconvencional en la petición de la demandada por la cual se pide indemnización del lucro cesante, pero reducida a lo no moratoria, por las razones que se han indicado, y la reserva de derechos que ha hecho, para que su especie y monto se determine en la etapa de ejecución del fallo, conforme con lo que dispone el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

OCHO: Que se compensa la cantidad ordenada a pagar a Emaresa en favor de Albemarle, en moneda dólar de los Estados Unidos de América, que se declara totalmente extinguida, quedando sólo la cantidad en moneda pesos chilenos. La cantidad que se compensa es por USD \$ 542.770.

En consecuencia, Emaresa deberá pagar a Albemarle la cantidad de \$ 102.322.368, más los intereses corrientes para operaciones no reajustables, a partir del día 19 de julio de 2019.



Se rechaza la excepción de compensación en lo que se refiere a pesos chilenos.

NUEVE: Que en lo demás queda rechazada la demanda reconvencional.

DIEZ: cada parte pagará sus costas por haber no resultado ninguna de ellas completamente vencida.”

I.- en cuanto al recurso de queja Rol IC N° 13324-2023:

Décimo: Que, en cuanto al arbitrio deducido por los abogados José Joaquín Ugarte Vial y Gonzalo Cruz Eberhard, en representación de Albemarle Limitada, como primera causal cuestionan el rechazo de los sobrecostos incurridos por su representada en la compra de geomembranas de reemplazo, desconociendo el juez la relación de causalidad.

La sentencia, se pronuncia en el motivo vigésimo al vigésimo segundo, al resolver las peticiones complementarias, se refiere a lo que los quejosos echan en falta, indicando los argumentos de las partes, razona respecto a la incompatibilidad con la solicitud de declarar resuelto el contrato, dando los fundamentos al respecto, lo que lo conduce a rechazar tal petición al igual que lo solicitados como subsidiario en la demanda reconvencional, por lo que esta primera causal será desestimada.

Undécimo: Fundan la siguiente imputación al SJA en el rechazo parcial de los costos incurridos para determinar la calidad de las geomembranas de Emaresa.

El Tribunal, lo concedió parcialmente a título indemnizatorio, tal como se indica en los considerandos vigésimo primero, vigésimo séptimo y vigésimo octavo, por cuanto argumentó que no era posible formular esta pretensión a título de cobro revertido, por cuanto señala que se *“caracteriza como un derecho derivado*



del incumplimiento del contrato, pero destinada a una operación de reemplazo, pero no como una partida indemnizatoria”.

En el motivo vigésimo séptimo, reitera *“que no es posible hacer este cobro a título de cobro revertido, por las mismas razones que ha entregado en el motivo vigésimo primero.”* Luego en el considerando que sigue, siguiendo con la procedencia o no del cobro y a qué título, se hace cargo de todas las excepciones y defensas de Emaresa para concluir que *“se acogerá esta parte de la petición, a título de indemnización contractual, fundada en el artículo 1489, en relación con los artículos 1556, 1557 y 1558 del Código Civil, pues, efectivamente son gastos que aparecen, en parte, indispensables para fundar la resolución del contrato.”*

Mención especial requiere la supuesta contradicción que según los quejosos se produciría entre las afirmaciones de que las prueba de análisis técnicos como “indispensables” en su conjunto y considerar, a su vez, tales pruebas como “sobreabundantes”, sin entregar una justificación para ello.

Basta para aclarar tal confusión, la lectura del párrafo segundo del basamento vigésimo octavo, el que se transcribe, solo para efectos vivendi: *“El Tribunal considera que efectivamente era necesario acreditar la calidad del material, y si bien existe m1a cierta sobreabundancia de prueba, este juicio ha demostrado la pertinencia de ella, por lo que se considera que esos gastos han sido indispensables, y son una consecuencia en que ha tenido que incurrir la demandante reconvencional, para demostrar la calidad del material que recibió, y cómo este material no era consistente con lo que debió haber recibido.”*

Duodécimo: Que, en cuanto a la última falta grave, se acusa que el juez en cuanto al monto de los costos en que incurrió Albemarle para desinstalar las geomembranas defectuosas,



puesto que la misma prueba que permitió al juez establecer la existencia, monto y concepto de dichos costos, demuestra que el 100% del monto reclamado corresponde a tal desinstalación, sin que el sentenciador justifique por qué descontó el 50%.

En el motivo vigésimo noveno, el juez argumenta y da las razones para no dar el 100% de lo solicitado, por lo que no es efectiva la falta de justificación.

En efecto, en el considerando indicado, en lo pertinente señala:

“Por las mismas razones entregadas en el motivo anterior, para rechazar la petición como cobro revertido, pero acogerla como indemnización, se concederá la petición a este título, pero reducida a la mitad del costo.

Este Tribunal, analizando la prueba, efectivamente concluye que no hay certeza de que todo el trabajo de Asercop se haya concentrado exclusivamente en lo que debió haber extraído del material de Emaresa instalado previamente, y por lo tanto sólo considerará la mitad de lo que por esta partida se demanda a título indemnizatorio, es decir la cantidad de \$ 59.000.000 de pesos”.

Décimo Tercero: Que, atendido a lo relacionado y razonado en los motivos que anteceden, las causales de faltas o abusos imputadas al SJA por los quejosos individualizados, deberán ser desestimadas.

II.- En cuanto al recurso de queja Rol IC N° 13639-2023:

Décimo Cuarto: Que, la demandante principal Emaresa, representada por su don Ramón Jara Contreras, también deduce recurso de queja en contra del juez árbitro Jorge Baraona González, por la comisión de faltas y abusos graves, en la sentencia definitiva y en la tramitación del proceso.



En cuanto a las faltas y abusos graves incurridos por el árbitro, afirma en primer lugar, que existe una infracción al debido proceso, en particular al principio de bilateralidad de la audiencia e igualdad ante la ley, en tanto el señor árbitro sucesiva y sistemáticamente, entorpeció su actividad probatoria, impidiéndole ofrecer la mejor prueba posible para acreditar su pretensión, es así que: no dio lugar a la medida prejudicial solicitada por su parte para garantizar la conservación de las geomembranas; no permitió que el perito Sr. Stark tener acceso a las pruebas de laboratorio que constaban en el expediente para la elaboración de su informe pericial; por el hecho de decretar como medida para mejor resolver un nuevo peritaje de carácter estadístico, designando a una persona sin las competencias necesarias; no fue oído el perito Sr. Stark respecto a las críticas metodológicas e interpretación de los resultados de este último peritaje; lo que evidencia una vulneración a la igualdad de armas entre las partes del proceso.

En este orden de ideas, el arbitrio deducido no podrá prosperar, por cuanto su fundamento dice relación con la tramitación del proceso, olvidando el quejoso, que el artículo 545 que lo contempla dice: *“el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación o, definitivas, (...)”*

Décimo Quinto: Que, en un segundo acápite, referido a la falta o abuso grave al dictar un fallo infundado y que infringe la ley y el mérito de autos, se acusa que el juez en la sentencia no habría ponderado el valor probatorio de los certificados TRI, que acreditarían de manera directa la calidad de las geomembranas a la fecha en que fueron entregadas a Albemarle.



Al respecto, en los basamentos segundo a séptimo del fallo, el SJA explica razonadamente por qué consideró que las geomembranas no cumplían con las especificaciones del contrato;

En relación con esto, el considerando segundo inicia señalando que, *“De la prueba que se ha rendido en estos autos, que ha sido variada y abundante, el Tribunal llega a la conclusión de que efectivamente existe prueba que permite concluir que el material testado, en lo que se refiere a geomembrana, ya sea como prueba de campo (...), como también la prueba que dio como resultado de los exámenes de laboratorio, realizados por empresas externas, tanto las que encargó, Albemarle, como al menos uno que fue encargado por Cipatex al laboratorio TRI, arrojan resultados negativos, en el sentido de que al menos en algunas de las cualidades no se respetan las exigencias técnicas de la licitación, para la geomembrana”*.

Continúa la sentencia con el análisis y valoración de la prueba: en el considerando tercero, se refiere *in extenso* al informe pericial del Sr. Stark, el que se abordará en el motivo siguiente; en los considerandos cuarto, quinto y séptimo, sigue con el análisis de la prueba y las alegaciones de Emaresa al respecto.

Específicamente, en lo referido al certificado TRI, el motivo sexto argumenta: *“Particularmente grave le parece a este Tribunal, que uno de los informes TRI, que se habían acompañado para confirmar la calidad del material, haya sido alterado por terceros (ALB N° 215), al menos en la característica de la estabilidad dimensional, pues, el dato corregido indicaba que esa partida no cumplía con la norma. Esta circunstancia confirma, que, desde el inicio, había prueba de que no todos los*



resultados de TRI estaban correctos, y en vez de reconocerse este hecho, ello no fue informado”.

Décimo Sexto: Que, por otro lado, se reprocha al juez por haber descartado en forma infundada y arbitraria el efecto de la degradación de las referidas geomembranas, que habría indicado el árbitro Sr. Stark, considerando solo una parte del informe.

El SJA, en cuanto al informe pericial, explica que, valorado conforme a la sana crítica, estimó que su conclusión no era segura respecto a la degradación, ya que como latamente lo explica en la motivación tercera, el resumen ejecutivo del informe pericial del Sr. Stark se contradice con el cuerpo del mismo.

“El informe que se le solicitó al laboratorio Geotechnics (...) arroja que en muchas de las especificaciones que debía tener el material, no satisface las cualidades que impone la base técnica de la licitación en porcentajes que superan el 10% de la muestras.

“Para este Tribunal, ese informe de laboratorio tiene fuerza en sí mismo, pues se trata de 45 muestras, de cuya procedencia no puede dudarse, porque el mismo Tribunal estuvo presente durante todo el procedimiento para tomarlas, incluso colaborando en ello; (...)”

“Sin embargo, el resultado del laboratorio Geotechnics, que está acompañada al proceso, incluso tomando en cuenta los gráficos que a este respecto preparó el mismo señor T. Stark, y que están registrados en su Informe, son contundentes en el sentido de que más del 10% de los rollos que se testearon, incumplieron las especificaciones técnicas de la licitación, en lo que a geomembrana se refiere, en distintos aspectos o factores medir.



Por lo que se expone, existe en el proceso prueba abundante y concordante de que el resto de la geomembrana tenía al menos fallas en porcentajes similares”.

“En consecuencia, este Tribunal no seguirá la conclusión del perito Sr. Stark, por ser contraria a las reglas de la lógica y del sentido común, de que como al menos 1 rollo cumplió en cada una de las propiedades de las especificaciones, de los 45 testeados, debe concluirse que no hay evidencia de que más el 10% de la geomembrana haya fallado. Esta conclusión, reiterada, supone admitir que la muestra que se tomó no era representativa y ocurre que este Tribunal precisamente entendió que una muestra de 45 rollos sobre un total de 510 era suficientemente representativa, pues esa definición la entregó el mismo perito”.

Luego en los párrafos siguientes de este considerando, el sentenciador continúa analizando la prueba y contrastándola con el informe pericial para explicar su conclusión respecto al valor probatorio que le dará.

Así, en el párrafo final expone: *“La prueba existente confirma que ya existían evidencias de fallas cuando se entregaron los rollos de geomembrana en el Salar de Atacama. Además, se puede concluir que a partir de las pruebas de laboratorio y los cuadros que muestra el perito, se han confirmado, por lo que la explicación que sugiere en esta parte, no se considera plausible, ni existe prueba sobre ello que permita llegar a una conclusión diferente, que no sea un mero indicio”.*

Décimo Séptimo: Que finalmente, estima que, abusivamente y con falta grave, el SJA tuvo por “acreditado el lucro cesante a pesar de no tener por acreditada su existencia, esbozándola de manera meramente condicional y sin fundamento en prueba alguna”.



El tribunal en su informe expone que la determinación del daño quedó pendiente porque así fue pedido, pero que potencialmente pudo haberse producido y existe prueba sobre ello. Sin embargo, en el mismo fallo se dejó consignado un elemento de hecho, para efectos de estimar este posible daño.

En efecto, en el basamento trigésimo primero de la sentencia se refiere expresamente a este reproche y resuelve:

“La petición siguiente de la demanda reconvencional es para la condena al derecho a cobro de daños y perjuicios por lucro cesante, para lo cual ha hecho reserva de derechos conforme lo dispone el artículo 173 del CPC, de forma tal que se determine esta cuantía en la etapa de ejecución del fallo, a lo que el tribunal ha accedido.

El Código Civil chileno dispone en los artículos 1556 y 1557 que todo incumplimiento contractual da derecho a los daños y perjuicios, cuya partida fundamental es el daño emergente y el lucro cesante; en este caso efectivamente puede haberse producido algún daño en lo que se refiere al lucro cesante, que tendrá que ser probado, pero que, en cualquier caso, el Tribunal deja asentado, que se ha probado en los autos que Albemarle comenzó a comprar el nuevo material, ya en agosto de 2018.”

Además, en la parte expositiva de la sentencia, en lo que se refiere a esta acción se indica: *“Albemarle demandó la indemnización por lucro cesante correspondiente a las ganancias que hubiese podido obtener de la producción de litio durante el período que se vio impedida de producir, a causa de los incumplimientos de Emaresa. Se reservó el derecho para discutir la cuantía de ese daño, para la etapa de ejecución del fallo, o en otro juicio diverso”.*



Décimo Octavo: Que, luego de todo lo dicho, este segundo recurso en análisis igualmente será rechazado, ya que las faltas o abusos graves denunciados, no son tales, lo que ha sido reflejado en las motivaciones precedentes.

Décimo Noveno: Que, consecuentemente, ha de indicarse sobre los reproches atribuidos en ambos arbitrios en examen que no satisfacen los requerimientos enfatizados en los motivos quinto, sexto y séptimo de esta sentencia desde que sus postulados no dan cuenta de faltas o abusos “graves” cometido en la dictación de la sentencia definitiva arbitral. Esta sola constatación determina, también, que los recursos deban ser necesariamente desestimados.

Vigésimo: Que finalmente es útil recordar, que el inciso final del artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales dispone, *“Sin embargo, en los casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de derecho facultades de arbitrador, en cuanto al procedimiento, y limitarse al pronunciamiento de la sentencia definitiva la aplicación estricta de la ley”*, cuyo es el caso de autos, que doctrinariamente se le llama árbitro mixto. Es así que, abocada esta Corte al examen de la sentencia denunciada y del mérito de lo razonado a lo largo de este fallo, se concluye que ella contiene la exposición de la controversia; la acciones deducidas y las alegaciones y defensas de cada una de las partes; el análisis de toda la prueba rendida y su valoración en forma detallada y pormenorizada; en la parte considerativa, además, explica la fundamentación jurídica aplicable al conflicto, cuyo análisis permite a esta Corte apreciar que el fallo arbitral se sustenta a sí mismo; en conclusión, no se vislumbra ninguna infracción a las reglas jurídicas, legales y procedimentales que la regulan.



Cuestión muy diferente es compartir ese examen o discrepar del mismo, pero ello haría necesario un juicio de valor de este tribunal sobre la decisión probatoria contenida en ese fallo, lo que -según se explicara-, significaría distorsionar la naturaleza y finalidad este recurso.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve:

I.- En cuanto al recurso de queja Rol IC N° 13324-2023:

Que, **se rechaza** el recurso de queja deducido por los abogados José Joaquín Ugarte Vial y Gonzalo Cruz Eberhard, en representación de la parte demandada principal y demandante reconvenional Albemarle Limitada, en contra juez árbitro don Jorge Baraona González por las supuestas faltas o abusos en el pronunciamiento de la sentencia dictada en los autos Rol CAM N° 3588-2019, con fecha 22 de agosto de dos mil veintitrés.

II.- En cuanto al recurso de queja Rol IC N° 13639-2023:

Que, **se rechaza** el recurso de queja deducido por don Ramón Jara Contreras, en representación de la demandante principal y demandada reconvenional “Emaresa, Ingenieros y Representaciones S.A.” en contra del juez referido por las faltas o abusos en la dictación de la sentencia ya individualizada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Paula Merino Verdugo.

No firma la Ministra señora Merino, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Civil (Queja) N° 13.324-2023 (acumulada Rol IC N°13.639-2023).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TCLXPWHERU



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TCLXPWHERU

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia López M. y Ministro Suplente Manuel Esteban Rodríguez V. Santiago, seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a seis de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TCLXPWHERU